

¿Nos matamos los unos a los otros?

Por Eduardo Posada Carbó **

Hace algunas semanas, en el discurso que le abrió paso a la reunión de Los Pozos, el presidente Andrés Pastrana se refirió al país que "quiere la paz" y a su capacidad "de reconciliarse". "Es este el país que quiere que le devuelvan su derecho a la esperanza", añadió el presidente, "ésa que le fue arrebatada el día que entre hermanos decidimos que había que matarnos por lo que pensábamos". Como en otros de sus discursos, el lenguaje de la misiva presidencial contiene giros y matices. Más adelante, el mandatario definió el proceso de paz en sus términos más limitados, al señalar aquellas iniciativas que deberían discutirse para descongelar las negociaciones entre los representantes del Estado y los alzados en armas. Y emplazó al jefe de las Farc: "la paz también depende de la voluntad de la insurgencia".

Examinadas con detenimiento, las palabras del discurso presidencial reflejan dos concepciones sustancialmente distintas del conflicto colombiano y, por consiguiente, de la misma paz. En su invitación concreta a continuar la negociación, las palabras del Presidente describen la existencia de un proceso que busca solucionar la confrontación entre el Estado, en representación de los colombianos, y grupos ilegales armados. Tal descripción, sin embargo, está precedida de un lenguaje que narra un conflicto más amplio, supuestamente originado en aquella decisión fratricida de "*matarnos por lo que pensábamos*".

El uso de la primera persona en plural puede haberse colado inadvertidamente en el discurso presidencial. Quizás. Pero tomadas en su conjunto con otros textos oficiales, y bajo la noción de la "paz integral", las palabras del Presidente abren grandes interrogantes que merecen franca discusión. ¿Qué busca en

últimas el proceso de paz? ¿Un acuerdo negociado del conflicto con los grupos alzados en armas? ¿O una reconciliación de la sociedad colombiana consigo misma? Es decir, ¿cuál es el conflicto que se está intentando solucionar? ¿El de la confrontación guerrillera con el Estado? ¿O el de una violencia generalizada entre colombianos?

Este debate no debería confinarse al lenguaje de la actual administración ni tampoco al discurso de los dirigentes políticos. Al tomar posesión de la jefatura del Estado en 1994, el entonces Presidente Ernesto Samper Pizano citaba las hoy bien difundidas palabras de Gabriel García Márquez en "la proclama", "Por un país al alcance de los niños". "Tenemos un amor casi irracional por la vida", señaló nuestro Premio Nobel, "pero nos matamos unos a otros por las ansias de vivir". Cuatro años más tarde, al sugerirle al entonces candidato Pastrana la necesidad de una "educación para la paz", el mismo García Márquez se refirió a "los escombros de un país enardecido donde nos levantamos para seguir matándonos los unos a los otros".

¿Será cierto que aquí nos matamos unos a otros? El lenguaje común de un buen número de comentaristas de prensa dejaría muy pocas dudas. "Este país asesino dedicado al Sagrado Corazón" es también "el país descoyuntado que no cesa de matarse", según Eduardo Escobar. "Los colombianos", en sentencia de Lisandro Duque Naranjo, "no tenemos madera para juzgarnos los unos a los otros sin tirarnos a descalabrar". Nótese la identificación siempre colectiva del sujeto criminal: "este país", "los colombianos", "nosotros". Y ese lenguaje condenatorio se aplica tanto a los colombianos de hoy como a los de ayer. En septiembre de 1999, Mauricio Pombo reabrió el famoso caso del Dr Russi, fusilado en 1852. Fue un "crimen de Estado", Pombo argumenta; pero paso seguido el responsable de tal acto se transforma: "matamos a Russi por el

sencillo hecho de que era un intelectual amigo de los artesanos". *¿Matamos a Russi?*

Por lo general, este lenguaje ha sido aún más categórico inmediatamente después de algunas de las tragedias que han sacudido al país. Tras la pública identificación de un depredador infantil, autor de una horrorosa serie de asesinatos, Jotamario Arbeláez escribió que esas eran "las consecuencias de un país mal tirado, que produce asesinos tan malparidos". Cuando asesinaron al humorista Jaime Garzón, las cartas de varios lectores de *El Tiempo* reflejaban ese sentimiento de culpa colectiva que nos transmiten casi a diario los formadores de opinión. En tales cartas los asesinos de Garzón desaparecían: éste pasaba a ser así en una "víctima más de la estúpida violencia que generamos los que vivimos conformes sin expresar nuestras ideas". Y los desastres naturales - como la tragedia de la zona cafetera en 1999 - se convierten en castigos divinos contra una nación en pecado mortal. "Cuando no somos nosotros los que nos canibalizamos", nos dijo entonces Hector Rincón, "es el dios de los colombianos el que quizá nos está recordando que lo merecemos".

Importa apreciar y subrayar con insistencia el significado de las palabras escogidas al señalar los responsables de los actos violentos. Los criminales - ya como individuos o ya como miembros de una organización - son los grandes ausentes en todas las anteriores citas. En su lugar, la responsabilidad del delito se traslada a un cuerpo abstracto: la nación. En concreto, todos los colombianos hemos sido en últimas criminalizados por ese discurso que además estaría negando en el fondo hasta la misma existencia del delito. Pues, tal como nos lo define el discurso dominante, estaríamos más bien frente a un enorme problema de patología social. En dicho discurso no hay víctimas de manos criminales en particular sino de la "violencia que generamos".

Este lenguaje inculpativo de toda la sociedad colombiana encuentra su apoyo estadístico en unas cifras que se popularizaron desde la década de 1980, según las cuales las extraordinarias tasas de homicidio en Colombia se debían ante todo a un fenómeno de violencia generalizada. Un documento de la Presidencia en 1993 le hizo eco al que parecía ser entonces ya una doctrina oficial: "la mayoría de los homicidios (cerca del 80%) hacen parte de una violencia cotidiana entre ciudadanos, no directamente relacionada con organizaciones criminales". De estas cifras se desprendió también otro diagnóstico: el conflicto armado o la violencia política sólo serían responsables de un porcentaje mínimo de los homicidios y asesinatos en Colombia (entre un 10 y un 15 por ciento). No se necesitan grandes esfuerzos para descubrir la arraigada generalización de estas cifras - y el diagnóstico que sugieren -, repetidas por los más diversos dirigentes de opinión y, por supuesto, acogidas sin mayor escrutinio por los medios extranjeros.

Sin embargo, tampoco se necesitan grandes esfuerzos hoy para identificar el número significativo de recientes investigaciones que arrojan serias dudas sobre el anterior diagnóstico. Mauricio Rubio ha llamado la atención sobre la pobreza empírica que sustenta el lugar común según el cual el 80 por ciento de los homicidios colombianos serían causados por la "violencia cotidiana entre ciudadanos". Su trabajo sugiere, por el contrario, que unos pocos, muy pocos agentes criminales serían los responsables de los altísimos índices de la violencia en nuestro país. Otros economistas como Alejandro Gaviria, Fabio Sánchez Torres y Jairo Núñez Méndez también han sugerido que las organizaciones armadas ilegales, en particular alrededor del tráfico de drogas, habrían desatado con sus acciones el espiral del crimen que nos está asfixiando. Desde distintas disciplinas y ángulos, otros investigadores como Daniel Pécaut y Gonzalo Sánchez han advertido así mismo las dificultades, cada vez más evidentes, de distinguir con claridad entre delitos políticos y delitos comunes.

Sánchez ha reconocido que "hasta podría invertirse el diagnóstico de los 'violentólogos' de hace diez años, y en lugar de afirmar el carácter marginal de la violencia política, subrayar su papel de contexto de reproducción de otras violencias".

Algunos me dirán que el uso de la primera persona en plural, en ese lenguaje que nos criminaliza como nación, no tiene nada que ver con las estadísticas, muchos menos con las discusiones entre investigadores. Que apenas sería una forma común de expresar el dolor nacional. Que no debe ser por ello motivo de preocupaciones. Se equivocan. Las palabras, a menos que no se crea en ellas, expresan ideas que se han ido arraigando, por los más diversos medios, en la mentalidad pública. Y las consecuencias de un lenguaje que despenaliza a los culpables mientras criminaliza a todos los colombianos son desastrosas para el tejido social. En el proceso de paz, dicho lenguaje confunde sus mismos objetivos. ¿Nos matamos unos a otros, o somos víctimas de organizaciones armadas ilegales? ¿Estamos buscando una supuesta reconciliación de la nación consigo misma, o una reconciliación entre el Estado - en representación de la sociedad -, y los grupos alzados en armas? La solución pronta y efectiva del conflicto interno colombiano dependerá quizá del acierto con que se responda a tales interrogantes.

[?] Este es el séptimo de una serie de artículos en los que se examina el lenguaje que domina hoy en el análisis de la realidad colombiana y sus efectos en el proceso de paz.

** Eduardo Posada Carbó es asesor permanente de la Fundación Ideas para la Paz. Sus artículos quincenales son elaborados especialmente para nuestras redes de información. Posada Carbó es abogado con especialización en ciencias socioeconómicas de la Universidad Javeriana, máster en Estudios Latinoamericanos y doctor en Historia Moderna de la Universidad de Oxford. Es autor y editor de varios libros y ensayos. En la actualidad es Senior Lecturer del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres y columnista de *El Tiempo*.